

Catalunya, entre gestos y comicios

LA VANGUARDIA, Editorial, 8.09.09

EMPIEZA en Catalunya un curso político de especial relevancia marcado por el largo año electoral que desembocará, si antes no hay sorpresas, en las elecciones al Parlament en otoño del 2010. Todo ello coincide con un panorama global de crisis, que tiene especial repercusión en algunos sectores clave de la economía catalana y que proyecta también la amenaza del paro en diversas actividades.

La mayor incertidumbre política de Catalunya depende, a fecha de hoy, del fallo que debe emitir el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, que fue aprobado en referéndum tras su tramitación en la Cámara catalana y las Cortes. Las continuadas batallas partidistas en el seno del TC han colocado a este órgano en una posición muy difícil a la hora de valorar esta importante ley orgánica de la que depende el autogobierno. En caso de producirse un fallo que recorte o reinterprete a la baja el Estatut, total o parcialmente, estaríamos ante un choque de legitimidades nunca visto desde 1978, puesto que el Alto Tribunal corregiría lo expresado en las urnas de acuerdo con las reglas de juego establecidas por el mismo ordenamiento constitucional. Como han observado varios expertos, un panorama de eventual colisión pondría a prueba la propia credibilidad y estabilidad del sistema, y sus repercusiones políticas podrían dar lugar a efectos y rebotes que ahora ni tan sólo se adivinan.

No obstante, la larga espera de la sentencia del TC ya ha servido para poner en evidencia que los excesos de tacticismo que influyeron en la

complicada elaboración del Estatut no han desaparecido. Los incesantes debates sobre las posibles respuestas a un fallo negativo indican que lo urgente, lo superficial y lo hipotético se impone, en el mundo político catalán, a una visión más reflexiva, serena y estratégica. Las discusiones bizantinas sobre la oportunidad de convocar manifestaciones preventivas o reactivas en defensa del Estatut sólo sirven para confundir y cansar a los ciudadanos, y para desplazar la responsabilidad de los actores políticos. Aunque fueron varias y muy importantes las instancias de la sociedad civil que en su día apoyaron un nuevo Estatut, no debe perderse de vista que la iniciativa surgió de los partidos y que son ellos, como representantes democráticos, a quienes compete ofrecer salidas razonables para evitar una crisis que desborde los cauces del edificio autonómico. Además, cualquier planteamiento de calado al respecto debería contar con el protagonismo de las principales figuras institucionales del país.

La política reclama gestos tanto como razones, pero no es bueno acabar en la gesticulación desconcertante. La incertidumbre que provoca la suerte final del Estatut no puede ser rellanada con la multiplicación de brindis al sol y acciones minoritarias e improvisadas que pretenden marcar la agenda del conjunto de la sociedad catalana. La peculiar consulta soberanista prevista en Arenys de Munt para el día 13 y su corolario de reacciones de todo tipo es el síntoma clamoroso de los riesgos que aparecen cuando los grandes partidos y sus dirigentes ceden espacio al ruido y a los efectismos del radicalismo retórico. Los extremos ideológicos se alimentan mutuamente y ello en nada contribuye a la búsqueda de consensos que permitan abordar con responsabilidad respuestas sólidas de país, que transmitan confianza y hagan recuperar el prestigio de Catalunya de puertas afuera y de puertas adentro.

Llevamos demasiado tiempo atrapados entre la frivolidad y el fatalismo. Los líderes catalanes han contribuido a ello, pero no debe olvidarse el papel que también tienen en este cuadro Zapatero y Rajoy, habituados a convertir lo catalán en munición permanente y fácil, para prevalecer en el conjunto de la política española. Los ciudadanos de Catalunya se merecen más realismo y más coherencia, y menos calentones oportunistas de cualquier signo. La crisis está golpeando el tejido empresarial catalán, conformado mayormente por pequeñas y medianas empresas, a la vez que pone al descubierto los déficits que hemos acumulado durante los años de bonanza. Catalunya ha crecido en población y en demanda de servicios básicos durante la última década, y ahora es momento de demostrar que el llamado sueño catalán tiene continuidad, y que será capaz de adaptarse con éxito a los envites de la globalización.

Tras el reciente acuerdo de financiación autonómica - que no soluciona definitivamente la falta estructural de recursos de Catalunya ni su déficit fiscal-es de esperar que, como ha anunciado el president Montilla, se dé prioridad a las políticas sociales y de impulso a la competitividad. El momento reclama que el Govern tripartito haga mucho más que superar el día a día. Urge el desbloqueo de los grandes proyectos que, a causa de recelos y discrepancias entre los socios, se han visto postergados o modificados a la baja. Afortunadamente, algunas leyes de especial interés, como las que afectan al marco educativo, han podido aprobarse mediante el pacto entre los grandes partidos del Parlament, una actitud constructiva que será mucho más difícil de repetir a causa de la pugna electoralista.

Zapatero sigue necesitando el concurso de los diputados catalanes en Madrid mientras la llamada agenda catalana sigue abierta a la espera del fallo del TC. La negociación de los presupuestos generales del Estado constituirá una prueba excelente del nivel de interlocución del Gobierno central con el tripartito y con CiU. La lógica electoral catalana pesará durante los próximos meses sobre toda la política española, más cuando los convergentes ya han dado a entender que no firmarán ningún cheque en blanco al presidente español, aunque están abiertos a los consensos para atajar la crisis. Para Rajoy, interesado en dar al PP una presencia más central en la sociedad catalana, las elecciones autonómicas serán una buena ocasión para aumentar su conocimiento directo, aunque el recorrido del Estatut condiciona sus mensajes de manera inevitable.

En los comicios, habrá cambios de caras. Sólo José Montilla, en el PSC, y Artur Mas, en CiU, repetirán dentro de un año como candidatos a la presidencia de la Generalitat, mientras ERC, PP e ICV ya han comenzado el relevo de sus respectivos cabezas de cartel. Todos los presidenciables deberán luchar contra la creciente desafección ciudadana, que podría dar alas a formaciones minoritarias. En suma, combatir la abstención, desplegar el autogobierno (pase lo que pase finalmente con la sentencia del Estatut) y buscar recetas contra la crisis serán los grandes argumentos de la nueva etapa.